

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

PRIMERO: Comparece **doña Pamela Toro Reidenbach**, abogado, domiciliada en Hacienda Macul Sur N° 5701, comuna de Peñalolén, Santiago, en representación convencional según se acreditará de don Gonzalo Patricio Jourdan Pereira, comunicador audiovisual, cédula de identidad N° 14.666.656-6, domiciliado en Padre Mariano N° 128, departamento 406, comuna de Providencia, quien deduce demanda de declaración de relación laboral, nulidad del despido, despido improcedente y cobro de prestaciones en contra de **Fundación Teatro Municipal de Las Condes**, del giro de su denominación, rol único tributario N° 65.027.349-4, representada legalmente por Mauricio Camus Valverde, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° 6.553.387-1 y por don Matías Antonio Awad Ruiz-Tagle, ignora profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° 13.548.903-4, o por quien haga sus veces conforme al artículo 4° del Código del Trabajo, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3300, comuna de Las Condes.

Funda la demanda en que ingresó a prestar servicios para la demandada el día 1 de octubre de 2018 en la Fundación Teatro Municipal de Las Condes, bajo vínculo de subordinación y dependencia en el área audiovisual, específicamente, en la confección de videos publicitarios para el Teatro, transmisiones, grabaciones y trabajos para la plataforma streaming de éste. En un comienzo dicha contratación se materializó en un contrato de prestación de servicios que en realidad encubría una relación laboral que sólo fue reconocida formalmente mediante contrato de 23 de diciembre de 2019, en el

que se indicó como fecha de inicio del contrato de trabajo el día 1 de enero de 2020.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración mensual devengada ascendía a la suma de \$1.796.791, según se reconoce expresamente en la carta de aviso de despido.

Con fecha 21 de septiembre 2022 recibió una carta en la cual se indicaba que su contrato de trabajo terminaba el día 22 de septiembre de 2022, por la causal contemplada en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es; “Necesidades de la Empresa”.

Según se indica someramente en la carta, la justificación de la causal se fundamentaría, “(...) en la modernización de área audiovisual de la Fundación Teatro Municipal de Las Condes”.

Con fecha 29 de septiembre de 2022 su representado firmó el finiquito propuesto por la demandada, pero con expresa reserva de derechos.

De la sola lectura de la carta es posible verificar que los fundamentos y hechos referidos en ella son genéricos y no cumplen los requisitos propios de la causal “Necesidades de la Empresa”, pues la “modernización” que supuestamente motiva su despido fue descrita en términos tan amplios e imprecisos que es imposible vincularla con la separación específica, incumpliendo el estándar legal propio de la causal del artículo 161 inciso primero el Código del Trabajo, el cual exige que para ser efectiva debe basarse en hechos que hayan vuelto imprescindible la desvinculación de que se trata, los que deben quedar claramente expresados y determinados. Por el contrario, los hechos expuestos en la carta son tan genéricos e indeterminados que no

guardan relación específica alguna con la separación de don Gonzalo Jourdan en concreto, pues se limita a invocar una supuesta “modernización” del área en que prestaba servicios, sin especificar en qué consistiría tal medida ni como ello hizo imposible la continuidad de sus labores.

De esta forma, la necesidad de la empresa invocada no es una causa objetiva que opere con total independencia de la voluntad unilateral y discrecional del empleador, quien no ha debido enfrentar ningún evento o circunstancias externa o ajena a su voluntad que le haya movido inevitablemente a decidir su separación. Por el contrario, en la carta de aviso informa que la decisión de desvincularlo se tomó única y exclusivamente en consideración a que la misma Fundación decidió realizar una “modernización”, sin que se explique por qué tal decisión lleva consigo a la inevitable consecuencia de que él sea desvinculado. Así, es dable concluir que existió una intervención directa del empleador en decidir la desvinculación de mi representado.

En mérito de lo expuesto y lo establecido en los artículos 161, 162, 168, 172, 425 y demás pertinentes del Código del Trabajo y principios propios del derecho laboral y demás normas legales que fueren aplicables, pide tener por interpuesta demanda en procedimiento ordinario de aplicación general por declaración de relación laboral, nulidad del despido, despido improcedente o injustificado y cobro de prestaciones laborales en contra Fundación Teatro Municipal de Las Condes, legalmente representada por don Mauricio Camus Valverde y don Matías Antonio Awad Ruiz-Tagle, por quien haga sus veces, todos ya individualizados, admitirla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, declarando:



Que existió una relación laboral entre las partes desde el 1 de octubre de 2018 y el 22 de septiembre de 2022, esto es, reconociendo el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, son aplicables las normas del Código del Trabajo por tal periodo;

1) Que el despido es nulo por aplicación de la Ley Bustos.

2) Que el despido fue improcedente o injustificado por aplicación improcedente del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo.

3) Que en consecuencia, la demandada debe ser condenada a pagar los siguientes montos:

a) Remuneraciones íntegras y demás prestaciones que se indiquen en el contrato de trabajo y cotizaciones de seguridad social que se devenguen desde la separación, esto es, desde el día 22 de septiembre de 2022, hasta la fecha que se convalide el despido en los términos ordenados por la ley.

b) Enterar las cotizaciones de seguridad social adeudadas a la fecha del despido, ocurrido el día 22 de septiembre de 2022.

c) Diferencia en el pago de la indemnización por años de servicios equivalente a \$1.796.791.

d) Recargo legal de la indemnización por años de servicios de un 30%, de conformidad a la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, ascendente a \$2.156.149.

e) La devolución de la suma de \$200.000, que me fue descontada ilegalmente por concepto de anticipo.

f) Feriado legal y proporcional por 42,12507 días hábiles y 21 días inhábiles, por un total de \$3.723.939.

g) Que las sumas adeudadas deberán pagarse con reajustes e intereses conforme al artículo 63 y 173 del Código del Trabajo; y

h) Las costas de la causa.

SEGUNDO: Comparece don Rodrigo Palacios Calvanese, abogado, en representación de la demandada Fundación Teatro Municipal De Las Condes.

Quien en primer término opone a la demanda la excepción de finiquito, fundada en que el actor, tal y como afirma y reconoce en la demanda, con fecha 29 de septiembre de 2022 firmó un finiquito del contrato de trabajo, suscrito y ratificado ante Notario Público. En éste formuló una reserva de derechos total y absolutamente genérica, del tipo de aquellas que nuestros tribunales superiores de justicia ya no vienen aceptando, desde hace ya un tiempo.

En efecto, ese tipo de reserva de acciones y derechos como ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, no produce el efecto de restar poder liberatorio al finiquito.

En la referida reserva de acciones y derechos el actor no se reservó el derecho de demandar la declaración de una relación de carácter laboral previa a la que en ese finiquito concluía, por lo que no puede deducir una acción en ese sentido.

El actor, mediante su reserva de derechos evidentemente desvirtúa el sentido de una reserva de acciones. Sobre todo, por el hecho de incluir esta



“reserva” conceptos “al voleo”, que se están pagando en el mismo finiquito y que además no resultan demandados.

Claramente, la reserva aludida no resta ni quita poder liberatorio en lo absoluto al Finiquito legalmente celebrado.

En consecuencia, es claro que se ha producido un finiquito y transacción extrajudicial con su representada que tuvo por objeto precaver o poner término a cualquier posible litigio que con posterioridad al término de aquellas relaciones laborales pudieran producirse, incluyendo por cierto las prestaciones que en este juicio se reclaman. Lo contrario sería desconocer el claro tenor de lo estipulado en el finiquito y sus efectos jurídicos.

Pide tener por interpuesta la excepción de finiquito, acogerla, y declarar que todas las acciones demandadas en estos autos están finiquitadas, al no haberse reservado, de forma correcta, seria, expresa y específicamente el derecho a reclamarlas en el finiquito; rechazando por tanto la demanda de autos en todas sus partes con expresa condena en costas, en subsidio que se acoja la excepción de finiquito respecto de la acción declarativa de relación laboral.

En subsidio de lo anterior opone excepción de prescripción respecto de la acción ordinaria de declaración de relación laboral, respecto del período comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el día 23 de diciembre de 2021. Cita al efecto el artículo 510 del Código del Trabajo

Argumenta que la relación laboral respecto de la cual el actor demanda su declaración, concluyó el día 31 de diciembre de 2019, habiendo transcurrido más de dos años desde su término, encontrándose prescrita cualquier acción o derecho que se pretenda sobre la misma.



Además el actor no se reservó en el finiquito debidamente suscrito el derecho a reclamar de esta relación laboral previa, o la continuidad de esta última con la que se finiquitó ahora en el 2022.

Por lo tanto la acción declarativa de relación laboral presentada en autos y todas aquellas que pretendan el pago de prestaciones que se hubieren hecho exigibles en ese período, se encuentran irremediabilmente prescritas.

Pide por interpuesta la excepción de prescripción, acogerla, y declarar que conforme a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, la acción para demandar la declaración de relación laboral y las prestaciones devengadas en la época referida se encuentran prescritas.

En cuanto al fondo del asunto contestando la demanda de despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones y declaración de relación laboral, niega y controvierte expresamente todos los hechos establecidos y afirmados en la demanda de autos, tal como establece el artículo 452 del Código del Trabajo, correspondiéndole al actor probarlos en su totalidad.

Acepta que el 1 de enero de 2020 don Gonzalo Jourdan ingresó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia de su representada, en calidad de Técnico en Iluminación.

Al término de la relación laboral y para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo la remuneración del actor ascendía a precisamente a \$1.796.791, como éste señala.

Las labores contratadas las desempeñó hasta el día 21 de septiembre de 2022, fecha en que se le puso término a su contrato de trabajo a partir del día



22, en virtud de la causal establecida en el artículo 161 inc. 1° del Código del Trabajo, esto es necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, cumpliendo por cierto con todas las formalidades legales.

En dicha carta, se invocó, como se dijo, la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es: “necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, fundada en el hecho efectivo de la modernización del área audiovisual de la Fundación Teatro Municipal de Las Condes.

Finalmente, con fecha 29 de septiembre de 2022 las partes suscribieron finiquito al contrato de trabajo, ratificado ante Notario Público, oportunidad en la que se le pagaron al trabajador los siguientes conceptos y montos: Indemnización sustitutiva de aviso previo: \$1.769.791, Indemnización por años de servicios \$5.309.373. Se realizó un descuento al trabajador por concepto de anticipo por \$200.000, pagando un total al trabajador de: \$6.879.164.-3.

Previo al inicio de la relación de carácter laboral del señor Jourdan, este efectivamente fue contratado por la Fundación como “freelance” para el área audiovisual del teatro. Entre el mes de Octubre de 2018 y diciembre de 2019 el actor tiene una relación de prestación de servicios a honorarios, sin que existiera subordinación o dependencia, control de horarios, jornada de trabajo, obligación de asistir físicamente, y ninguna otra obligación o característica que pudiera confundir esta relación de servicios con una de carácter laboral.

De otro lado alega que el despido del señor Jourdan obedeció a una real necesidad de la empresa, y así será acreditado en la etapa procesal respectiva.

La terminación del contrato de trabajo entre el actor y su representada se llevó a cabo dando estricto cumplimiento de todas las formalidades del despido que contempla la ley, en especial aquellas establecidas expresamente en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Finalmente, pide tener por contestada demanda por despido injustificado, nulidad del despido, y cobro de prestaciones presentada por Gonzalo Jourdan, en contra de su representada, la Fundación Teatro Municipal de Las Condes, en los términos expuestos en el cuerpo de su escrito, declarando, en definitiva que se rechaza la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que celebrada la audiencia preparatoria con fecha 16 de diciembre de 2020, fueron llamadas las partes a conciliación, la que no se produjo, fijándose como hechos no controvertidos los siguientes:

1. Fecha de término 21 de septiembre de 2022.
2. La causal de necesidades de la empresa.
3. La remuneración \$1.796.791.
4. La existencia de finiquito.
5. Inicio de actividades 01 de enero de 2020.
6. La prestación de servicios civiles u honorarios comienza con fecha 01 de octubre de 2018.

Asimismo, fue recibida la causa a prueba, fijándose el siguiente hecho a probar:



1. Fecha de inicio efectiva de la relación laboral entre demandante y demandada.

2. Contenido de la carta de despido y efectividad de las declaraciones formuladas en ella para el caso de tenerla.

3. Situación del feriado legal y proporcional demandado, caso de ser utilizado, época de su uso o en su defecto monto a compensar.

4. Estado de pago de las cotizaciones previsionales del demandante al momento de su separación. En caso de estar pagadas, época del pago, montos involucrados e identidad del pagador.

5. Contenido del finiquito celebrado entre las partes. Estipulaciones y declaraciones formuladas en ellas por las partes.

6. Procedencia del descuento por anticipo realizado por el demandado. Origen del mismo.

CUARTO: Verificada la audiencia de juicio, la parte demandada encontrándose válidamente notificada no comparece, por lo que no incorporó prueba, por su parte la demandante procedió a incorporar las pruebas que constan íntegramente en el registro de audio y de digitalización del tribunal, las que se dan por reproducidas y que, en lo pertinente, serán analizadas en los considerandos posteriores.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE FINIQUITO:

QUINTO: Al efecto cabe tener presente que la parte denunciada opone dicha excepción, fundándola, en síntesis, en que la demandante suscribió un



finiquito ante ministro de fe con su representada el 29 de septiembre de 2022, en éste formuló una reserva de derechos total y absolutamente genérica, del tipo de aquellas que nuestros tribunales superiores de justicia ya no aceptan.

En la referida reserva de acciones y derechos el actor no realizó reserva del derecho de demandar la declaración de relación de carácter laboral previa a la que en ese finiquito concluía. Por tanto la acción ordinaria de declaración de relación laboral no puede prosperar.

El actor, mediante su reserva de derechos evidentemente desvirtúa el sentido de una reserva de acciones, sobre todo, por el hecho de incluir esta “reserva” conceptos “al voleo”, que se están pagando en el mismo finiquito, y que además no resultan demandados, por lo que la reserva aludida no resta ni quita poder liberatorio en lo absoluto al Finiquito legalmente celebrado.

Pide rechazar la demanda de autos en todas sus partes, con expresa condena en costas, en subsidio que se acoja la excepción de finiquito respecto de la acción declarativa de relación laboral.

SEXTO: Resulta necesario en primer término analizar el alcance de los términos en que fue redactada la reserva de derechos la aludida, la que estipula en lo que interesa lo que sigue: “Me reservo el derecho de demandar y reclamar judicialmente y/o extrajudicialmente todos los derechos emanados de mi contrato de trabajo...”

Al respecto, cabe señalar que el artículo 177 del Código del Trabajo, señala textualmente "El trabajador que haya aceptado la suscripción del finiquito podrá consignar que se reserva el derecho a accionar judicialmente contra su ex empleador". La norma en cuestión sólo exige que en la reserva el trabajador deje constancia de tal hecho, y no distingue fórmula alguna para



que ello ocurra, o que lo haga de una manera específica. En el caso de autos es el propio trabajador el que de su puño y letra consignó tal reserva, esto es, que se reservaba el derecho de tomar acciones posteriores, por lo que la reserva hecha por el trabajador en el finiquito, es suficiente para adquirir el valor pretendido por éste al momento de efectuarla, es decir, establecer su disconformidad respecto de los rubros y descuentos del mismo con las cuales no estuvo de acuerdo.

Además, cabe consignar que conforme a los principios que informan el derecho laboral, y lo señalado por la doctrina y jurisprudencia, aquellos como el de la primacía de la realidad, hacen que no sea posible exigir al trabajador el empleo de términos exactos y técnicos al momento de hacer la reserva la acciones o excepciones en el finiquito de su contrato de trabajo, puesto que los alcances de tal reserva no pueden impedirle que demande respecto de un aspecto determinado. Así por lo demás lo ha dicho la Corte Suprema, al señalar que "Se uniforma la jurisprudencia en el sentido que el finiquito sólo tiene poder liberatorio respecto de las materias que las partes acuerdan de manera expresa..." (Rol 6880 2017, Excma. Corte Suprema).

En ese sentido en el finiquito en cuestión, como se dijo, el trabajador manifestó expresamente su intención de reclamar por los derecho emanados de su contrato de trabajo, el cual entiende vigente desde una fecha anterior a la que reconoce la demandada, interpretación que resulta más acorde con el principio indubio pro operario que nos dice que las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo, en caso de duda en cuanto a su sentido y alcance, deben ser interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador y, teniendo presente, como ha señalado la jurisprudencia que el poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las partes han concordado



expresamente y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó, sea porque una de las partes formula la reserva correspondiente, sea porque se trate de derechos u obligaciones no especificados por los comparecientes, será desestimada la excepción que se analiza.

EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRICIÓN:

SÉPTIMO: La demandada opone excepción de prescripción de la acción ordinaria de declaración de relación laboral, respecto del período anterior al 1 de enero de 2020. Cita al efecto el artículo 510 del Código del Trabajo

Argumenta, que la relación laboral respecto de la cual el actor demanda su declaración concluyó el día 31 de diciembre de 2019, habiendo transcurrido más de dos años desde su término, encontrándose prescrita cualquier acción o derecho que se pretenda sobre la misma.

OCTAVO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo inciso primero: "Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles". Por consiguiente, el plazo de prescripción extintiva de la acción para obtener la declaración de existencia de una relación laboral es el contemplado en el inciso primero del artículo 510 de la norma legal citada, plazo que empieza a correr desde la época en que se hizo exigible, la cual sólo es dable entenderla desde el término de la relación laboral, atendido que no es posible exigir al trabajador que inicie una demanda en contra de su empleador durante la vigencia de la relación laboral, exponiendo de esa forma su fuente laboral dado la posición de parte más débil que ostenta.



NOVENO: En virtud de lo señalado, la interpretación correcta es considerar que el plazo de dos años establecido en el artículo 510 inciso primero del Código del Trabajo comienza a computarse desde que se verifica la separación del trabajador, por cuanto, a juicio de esta sentenciadora, los derechos laborales reclamados y regidos por el Código del Trabajo, se hicieron exigibles por el actor, desde la fecha de término de la relación laboral, a saber; el día 21 de septiembre de 2022, ya que recién en dicha oportunidad el actor tuvo la posibilidad de ejercer la acción con el fin de reclamarlos. Acoger las alegaciones de la demanda implica aceptar su tesis de que el trabajador debía demandar mientras prestaba servicios, estando en un principio y en los hechos sometido a un trabajo a honorarios circunstancia que le impedía poder hacer efectiva su reclamación.

En consideración a lo señalado, desde la terminación del contrato, que se produjo el 21 de septiembre de 2022. Cuestión no debatida en juicio, ya sea que se considere para su interrupción la época de la interposición de la demanda, el 14 de noviembre de 2022 o la de la notificación practicada a la demandada el 21 de noviembre del mismo año, el plazo de prescripción de la acción de declaración de relación laboral y las prestaciones devengadas no se había cumplido.

EN CUANTO A LA ACCIÓN DE DECLARACIÓN DE RELACION LABORAL, NULIDAD DEL DESPIDO, DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES:

DÉCIMO: Que apreciadas las pruebas incorporadas en juicio, conforme a las reglas de la sana crítica, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos



medios probatorios incorporados, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:

1.- Que la parte demandante suscribió diversos contratos de honorarios con Fundación Teatro Municipal de Las Condes, el primero, el 1 de octubre de 2018, con vigencia desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2018.

las funciones se detallaban en la cláusula tercera de dicho contrato señala “sin que la enumeración sea taxativa, don Gonzalo Jourdan Pereira, deberá efectuar los videos del material audio visual conforme a los contenidos que le sean proporcionados por el Director Técnico y/o las personas que se desempeñan en el área de marketing y comunicaciones del Teatro, para la difusión y publicidad de la totalidad de los eventos culturales y artísticos que se presenten en el Teatro Municipal de Las Condes, mantener actualizada la red de difusión en pantallas de boleterías y foyer de dicho Teatro, y confeccionar el registro de la totalidad de los espectáculos, shows, conciertos, eventos de toda índole que se realicen en el mismo, generando un archivo audio visual que será registrado y archivado por el mencionado teatro”. Según se desprende del documento incorporado a folio 57.

2.- Luego las partes suscribieron un segundo contrato de prestación de servicios a honorarios el día 20 de diciembre de 2018, con vigencia era desde 1 de enero de 2019 y el día 31 de enero de 2019, y el día 25 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Las funciones del actor detalladas en la cláusula tercera de dicho acuerdo eran las siguientes “Sin que la enumeración sea taxativa, don Gonzalo Jourdan Pereira, deberá efectuar los videos del material audio visual conforme a los contenidos que le sean proporcionados por el Director Técnico y/o las



personas que se desempeñan en el área de marketing y comunicaciones del Teatro, para la difusión y publicidad de la totalidad de los eventos culturales y artísticos que se presenten en el Teatro Municipal de Las Condes, mantener actualizada la red de difusión en pantallas de boleterías y foyer de dicho Teatro, y confeccionar el registro de la totalidad de los espectáculos, shows, conciertos, eventos de toda índole que se realicen en el mismo, generando un archivo audio visual que será registrado y archivado por el mencionado teatro”. Según consta en el documento incorporado a folio 57.

3.- Que el 23 de diciembre de 2019 las partes suscribieron contrato de trabajo con vigencia desde e 1 de enero de 2020 de carácter indefinido. En dicho acuerdo se estipuló en la cláusula tercera “Sin que la enumeración sea taxativa, don Gonzalo Jourdan Pereira, deberá efectuar los videos del material audio visual conforme a los contenidos que le sean proporcionados por el Director Técnico y/o las personas que se desempeñan en el área de marketing y comunicaciones del Teatro, para la difusión y publicidad de la totalidad de los eventos culturales y artísticos que se presenten en el Teatro Municipal de Las Condes, mantener actualizada la red de difusión en pantallas de boleterías y foyer de dicho Teatro, y confeccionar el registro de la totalidad de los espectáculos, shows, conciertos, eventos de toda índole que se realicen en el mismo, generando un archivo audio visual que será registrado y archivado por el mencionado teatro”.

4.- Que durante la vigencia de los contratos a honorarios suscritos entre las partes, la parte demandante no declaró y entero cotizaciones previsionales a nombre del actor en AFP Modelo e Isapre Colmena Golden Cross, no registrando cotizaciones de cesantía en AFC; hecho que se tiene por

establecido con el mérito de los certificados de cada una de las instituciones mencionadas incorporados por la parte demandante.

5.- Que con fecha 21 de septiembre de 2022, Fundación Teatro Municipal de Las Condes demandada puso término al contrato de trabajo del actor invocando la causal del artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es; necesidades de la empresa, lo que se tiene por establecido con el mérito de la carta de despido incorporada por la parte demandante.

6.- Que el trabajador demandante a la época de terminación de sus servicios, percibía una remuneración mensual que ascendía a la suma de \$1.769.791; hecho que no se encuentra controvertido entre las partes y, que se desprende del mérito de la base de cálculo indemnizatoria utilizada para el pago de indemnizaciones legales en el finiquito respectivo, incorporado por las partes.

7.- Que el trabajador demandante suscribió ante Ministro de fe finiquito con fecha 29 de septiembre de 2022, percibiendo en dicha oportunidad el pago de las indemnizaciones legales y demás prestaciones laborales reconocidas adeudar, previo descuento del aporte efectuado por la empresa demandada a la cuenta individual de cesantía del actor durante la vigencia del vínculo laboral; hecho que no se encuentra controvertido entre las partes y, que se tiene por establecido con el mérito del finiquito incorporado por ambas partes al proceso.

DÉCIMO PRIMERO: Cabe tener presente que la controversia planteada en autos corresponde a establecer la existencia del vínculo laboral que reclama la parte demandante en el libelo desde el mes de octubre de 2018 hasta diciembre de 2019, respecto de la demandada en el presente proceso. En



efecto, la parte demandante plantea en su acción que el vínculo que lo unió con la Fundación Teatro Municipal de Las Condes demandada en autos, fue continuo a partir del mes octubre de 2018 y en los términos contemplados por el legislador en el artículo 7° del Código del Trabajo. Por su parte la demandada evacuó el trámite de contestación de la demanda, controvirtiendo la naturaleza de los servicios prestados por el actor, sosteniendo que la relación entre las partes no se encuentra regulada por las normas del Código del Trabajo, sino se trata de un contrato “freelance” para el área audiovisual del teatro, manteniendo desde el mes de octubre de 2018 hasta diciembre de 2019 una relación de prestación de servicios a honorarios.

DÉCIMO SEGUNDO: Al efecto ha quedado establecido como un hecho de la causa, que la parte demandante suscribió diversos contratos de honorarios con la demandada, desde el 1 de octubre de 2018 hasta la celebración del contrato de trabajo de carácter indefinido el 23 de diciembre de 2019, cuya vigencia comenzó el 1 de enero de 2020. De los diversos contratos incorporados en juicio consta que el actor, desde su ingreso hasta el término de la relación laboral, desempeñó las mismas funciones.

La parte demandante rindió prueba testimonial, consistente en la declaración de doña Fernanda Muñoz Hola y doña María Constanza Rioseco Lantaño, quienes previamente juramentadas, expusieron que conocen al actor con quien trabajaron, motivo por el cual saben que él cumplía horario, trabajaba horas extras y siempre se mantuvo en el mismo cargo. En menos de semana una después de su despido ya había alguien en su reemplazo, desempeñando las mismas funciones que él realizaba. La señora María Constanza Rioseco, quien trabaja desde el año 2011 para la demandada, aseveró que el actor recibía órdenes de su jefe quien además supervisaba su



trabajo, realizando siempre las mismas funciones. Su jornada de trabajo era de 45 horas semanales como los demás empleados de la Fundación.

La prueba que se analiza, por tratarse de testigos que mantuvieron un trato directo y cercano con las partes, se estima han tomado conocimiento directo sobre los hechos que han declarado, demostrando seguridad y precisión en sus testimonios, forman plena convicción en el tribunal.

DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, para determinar el vínculo o la relación de trabajo, es necesario atender a la situación real en que se encuentra el trabajador, más que a lo indicado en los documentos que hubieren suscrito las partes, de manera tal, que si en la práctica el trabajador se encuentra prestando de forma continua servicios, con la obligación de asistencia al lugar de trabajo, cumpliendo un horario y acatando órdenes e instrucciones impartidas por la persona a quien benefician dichos servicios, durante un extenso periodo de tiempo, debe estimarse que se encuentra sujeto a un vínculo de subordinación o dependencia con independencia de lo pactado por las partes, pues existen indicios de laboralidad.

En mérito de lo indicado, se accederá a la acción de declaración de relación laboral, estableciéndose que ésta se verificó desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 21 de septiembre de 2022.

DÉCIMO CUARTO: Corresponde referirse a la acción de nulidad de despido fundada en que la empleadora no cumplió con la obligación de pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social al momento del despido, ya que no acreditó el pago de éstas durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, adeudando el pago cotizaciones



previsionales, seguro de cesantía y cotizaciones de salud durante dicho periodo.

En relación con lo anterior, la Excma. Corte Suprema Cuarta Sala (Especial) el 05/04/2023, en autos Rol 3676-2022, en fallo sobre Unificación de Jurisprudencia Laboral ha resuelto: “Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 8.318 14, 9.690 15, 76.274 16, 19117, de 2 de junio de 2015, 24 de marzo de 2016, 20 de diciembre de 2016, y de 25 de abril de 2017, respectivamente, ha sostenido la procedencia de la sanción de nulidad del despido cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, atendida la evidente naturaleza declarativa de dicho pronunciamiento; y, además, que “la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y ésta se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos”.

De este modo, y considerando que el fallo sólo constata una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la fecha en que las partes iniciaron realmente la relación laboral”.

Así las cosas habiendo declarado el Tribunal la existencia de la relación laboral desde el 1 de octubre de 2018, desde esa época correspondía el pago de sus cotizaciones previsionales por su empleador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.



DÉCIMO QUINTO: En relación a la acción de despido injustificado, sin perjuicio que la actora incorporó la carta de despido, se constata que la ex empleadora no cumplió con las formalidades previstas, al efecto, en el artículo 162 del Código del Trabajo. Además, de conformidad a lo previsto en el artículo 454 N° 1 del Código del Trabajo, que circunscribe la actividad probatoria de la ex empleadora a los hechos contenidos en la carta de aviso de despido, atendido su incomparecencia a la audiencia de juicio, nada pudo probar respecto de los motivos de la desvinculación. Así las cosas, el despido se tendrá por injustificado y, congruente con lo anterior, se mandará pagar el recargo legal de la indemnización por años de servicios, en un 30%, acorde a lo dispuesto en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, en base a la remuneración tenida por acreditada de \$ 1.769.791.

DÉCIMO SEXTO: No obstante lo señalado, se dirá que en relación al fundamento invocado en la carta de despido relativo a la modernización del área Audiovisual de la Fundación Teatro Municipal de Las Condes, del sólo contenido factico de la comunicación de despido se desprende en primer término, que esta no contiene un extenso contenido factico, no logrando reunir de manera satisfactoria el estándar mínimo exigido por el legislador de conformidad a lo establecido en el artículo 454 N° 1 inciso segundo del Código del Trabajo, en cuanto a describir con claridad los presupuestos facticos en que fundamenta su decisión, dejando de esa manera en indefensión al trabajador demandante, privándolo de la posibilidad de ejercer su derecho a defensa respecto de los hechos en que se justifica su despido, ya que los hechos invocados en la comunicación de despido resultan tener un carácter demasiado vago, sin especificar ni explicar de manera concreta en que habría consistido el proceso de modernización del área en que desempeñaba



funciones el trabajador demandante, más aun teniendo presente que la parte demandada ninguna prueba ofreció ni aportó para acreditar la escueta justificación en que fundo su decisión y los testigos señalaron que inmediatamente después del despido del actor fue contratada otra persona para desempeñar sus funciones.

DÉCIMO SÉPTIMO: Cabe recordar, que la causal de necesidades de la empresa se ha entendido en forma objetiva, esto es, que deben darse ciertas condiciones graves y permanentes en la empresa para poner término al contrato, es decir, condiciones de la empresa no de la trabajadora, por ello no dependen de la mera voluntad del empleador, de manera tal, necesidades que pueden tener su origen en circunstancias de carácter económico -bajas en la productividad o cambios en las condiciones de mercado o economía-, los que no deben ser transitorios o subsanables, esto es, que la causal debe ser independiente de la voluntad de las partes, y que dicen relación exclusivamente con circunstancias que rodean la actividad económica de que se trata; como en la existencia de un detrimento en la situación financiera de la empresa que afecte su marcha, o bien la reestructuración en la administración del giro comercial que ejecuta, situación que en este caso, sólo ha sido invocada en la comunicación de despido, sin embargo, no ha sido descrita de manera circunstanciada, debiendo tomar en consideración que la parte demandante no incorporó prueba alguna al efecto.

Por todas estas consideraciones y análisis de la prueba rendida, no hacen sino hacer concluir a esta sentenciadora que el despido del que fue objeto el trabajador demandante fue injustificado y, por ende, procederá ordenar el pago del recargo legal de un 30% respecto de la indemnización por



años de servicios ya pagada al trabajador al momento de la suscripción del finiquito respectivo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en cuanto a las cotizaciones adeudadas y nulidad del despido, lo primero es señalar que tocaba a la ex empleadora acreditar el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía que antes debió descontar al trabajador de su remuneración, conforme al mandato legal, lo que no hizo. En consecuencia, se accederá al pago de las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía antes referidas, en AFP Masvida, Colmena Golden Cross y AFC Chile, sobre la base de una remuneración mensual de \$1.769.791. Congruente con lo anterior, se declarará, asimismo, la nulidad del despido, de conformidad a lo establecido en los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, por lo que se condenará a la demandada al pago de remuneraciones íntegras, esto es, con sus correspondientes cotizaciones previsionales, de salud y cesantía, las que se deberán descontar y enterar en Afp Masvida, Colmena y AFc Chile, desde la fecha del despido, 22 de septiembre de 2022, hasta la convalidación, que se producirá en la fecha que se notifique el íntegro de las cotizaciones de seguridad social, sobre la base de una remuneración mensual de \$ 1.769.791.

DÉCIMO NOVENO: Que, en cuanto a las prestaciones reclamadas, no habiendo acreditado la demandada la procedencia del descuento de \$200.000 realizado en el finiquito del trabajador, habiéndose pagado una suma menor a la que corresponde por concepto de indemnización por años de servicios, además siendo el feriado legal y proporcional derechos para el trabajador y obligaciones para la ex empleadora, tocaba a ésta acreditar su extinción, lo que no hizo. Por lo mismo, se mandará pagar la diferencia adeudada por indemnización por años de servicios que asciende a \$ 1.769.791, \$200.000 por



descuento indebido, 21 días de feriado legal por \$ 1.238.858, y 20, 41 días de feriado proporcional por \$1.204.043.

VIGÉSIMO: La prueba analizada lo ha sido conforme a las reglas de la sana crítica, y el restante material probatorio en nada altera lo concluido en este fallo.

VIGESIMO PRIMERO: Que habiendo resultado totalmente vencida la demandada, se la condenará en costas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 58, 63, 67, 162, 172, 173, 425 y siguientes, 456 y 459 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que **se rechazan** las excepciones de finiquito y prescripción opuesta por la demandada.

II.- Que **se acoge** la demanda interpuesta por don Gonzalo Patricio Jourdan Pereira en contra de la Fundación Teatro Municipal de Las Condes, RUT N° 65.027.349-4, representada legalmente por don Mauricio Camus Valverde, cédula de identidad N°6.553.387-1 y por don Matías Antonio Awad Ruiz-Tagle, cédula de identidad N°13.548.903-4, en cuanto se declara la existencia de la relación laboral entre las partes a contar del día 1 de octubre de 2018 hasta el 21 de septiembre de 2022.

III.- Que, asimismo, se declara nulo el despido de que fue objeto el actor, con fecha 21 de septiembre de 2022, condenándose consecuentemente a la demandada al pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales que se devenguen desde la fecha del despido, esto es, el día 21 de septiembre de 2022 y hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el pago de las



cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía adeudadas por el periodo 10 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, debiendo tomarse en consideración como remuneración mensual, la suma de \$1.769.791.

IV.- Que asimismo se declara injustificado el despido de que fue objeto el actor con fecha 21 de septiembre de 2021, y se condena, consecuencialmente, a la demandada al pago al actor de las siguientes prestaciones:

a) Saldo adeudado por Indemnización por años de servicios, por la suma de \$1.769.791,

b) Recargo legal sobre la indemnización por años de servicios de un 30% de conformidad a lo establecido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, por la suma de \$2.123.749.

c) Feriado legal adeudado por 21 días, por la suma de \$ 1.238.858.

d) Feriado proporcional devengado por el último periodo trabajado, por la suma de \$ 1.240.046.

e) Monto descontado del finiquito por \$200.000.

V.- Que las prestaciones e indemnizaciones ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses que se indican en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

VI.- Que se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida las que se regulan en \$1.000.000.

VII.- Ejecutoriada que sea esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y



pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional, de conformidad a lo establecido en el artículo 462 del Código del Trabajo.

Se ordena el registro y archivo en su oportunidad de la presente causa.

RIT : O-6986-2022

RUC : 22- 4-0440241-6

Pronunciada por PAULINA VALENZUELA NEGRETE, Juez Suplente del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

